

LAS CARAS DEL CONFLICTO EN EL PÁRAMO: UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LAS VISIONES DE LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN*.

Melissa Valencia Hernández**

Estudiante del pregrado de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia.

Eje: Historia Política

Trabajo preparado para su presentación en el XI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), organizado conjuntamente por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y la Asociación Chilena de Ciencia Política, Santiago, Chile, 21, 22 y 23 de julio 2022.

Resumen:

Este artículo describe las visiones de la paz, la justicia y la reparación de la población del municipio de Sonsón, Antioquia durante el periodo 2007-2021; con el objetivo de entender los retos y dificultades de la construcción de paz en este territorio tras los hechos acaecidos durante el conflicto armado colombiano. Para llevar a cabo la investigación, se recurrió a la exploración de fuentes secundarias, las entrevistas, la observación participante y la revisión del archivo de la Memoria de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón. Se concluye que, si bien en este municipio se ponen en marcha programas y mecanismos que pretenden remendar el daño sufrido ante la guerra; las políticas y el modelo de desarrollo existente riñen con las visiones de paz, justicia y reparación de una parte de sus pobladores y con sus formas de habitar el territorio. Este trabajo aporta al entendimiento de los procesos políticos que se entretajan en zonas donde el conflicto armado dejó grandes huellas, dando luces sobre las tensiones, nuevas conflictividades y disputas que ponen en jaque las pretensiones de construcción de paz en los territorios flagelados por la guerra.

Palabras claves: Sonsón, construcción de paz, conflicto armado, justicia, memoria, reparación.

* Este artículo se deriva del trabajo de grado realizado para optar al Título de Politólogo en la Universidad de Antioquia y el cual recibió apoyo del Fondo de Trabajos de Grado para estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

** Miembro del semillero sobre América Latina en perspectiva comparada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

Introducción¹

“Entonces usted iba subiendo por la vereda con el mercado que traía del pueblo y esos uniformados lo paraban y se lo quitaban, porque decían que usted le estaba llevando comida a la guerrilla, que usted era auxiliador de la guerrilla” (Entrevistado 5, 2019). Esta es solo una de las tantas anécdotas que durante el trabajo de campo me ayudaron a armar el rompecabezas del paso del conflicto armado en Sonsón. Una guerra en la cual, la población civil, y sobre todo los campesinos de las zonas más alejadas del municipio, tuvieron que experimentar las lógicas de autoridad y dominación de los diferentes grupos que se disputaron el territorio: el Frente 47 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y el Ejército Nacional de Colombia (EJC).

El municipio de Sonsón se encuentra ubicado en la subregión del Oriente Antioqueño al noroccidente del país. En este lugar, la violencia provocada por el conflicto armado generó una aguda crisis humanitaria que se inscribió en una intensa disputa territorial entre 1996 y 2006 (Conciudadanía, 2019), ya que sobre esta zona pesaba un importante interés geoestratégico al estar cerca de la autopista Medellín-Bogotá y contar con grandes zonas boscosas que servían de retaguardia y corredor hacia otras zonas del Oriente antioqueño². Hacia 2002, en el marco de la Política de Seguridad Democrática³ durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), se pusieron en marcha las operaciones “Meteoro” y “Marcial” para luchar contra la guerrilla en la región; con las que se agravan las consecuencias del conflicto armado y se elevan las cifras del desplazamiento forzado en Sonsón⁴. Posteriormente, cuando los eventos de la guerra

¹ Agradezco a todas las personas que desde diferentes lugares aportaron a este trabajo: Irene Piedrahita Arcila como asesora durante el trabajo de grado y a todos los habitantes del Sonsón que tanto en el casco urbano como en la zona rural me acogieron y compartieron conmigo sus memorias e historias de vida.

² Sobre la presencia y control territorial de las FARC-EP y de otros actores armados en el Oriente antioqueño, véase el capítulo 2 del libro Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008 (García y Aramburo 2011, 55-112)

³ La política de seguridad democrática se construyó sobre la marcha mediante tres líneas de acción: la primera, la continuación de la ofensiva contra las FARC, activada al final del gobierno anterior; la segunda, una “política de paz” con los paramilitares, y la tercera, un grupo de políticas específicas –como los soldados campesinos, los estímulos a la desertión y las redes de informantes– destinadas a alimentar a las otras dos (Leal Buitrago, 2006 pág 5).

⁴ Al respecto, los reportes de la Red Nacional de Información indican que los índices de desplazamiento forzado empiezan a disminuir en la totalidad de los municipios del Oriente Antioqueño a partir del año 2003; no obstante, en la zona de páramos (Argelia, Nariño y Sonsón), las cifras de víctimas por este fenómeno presentan tendencias a mantenerse en los niveles de años anteriores (Gallego, 2016, pág 64). Para el caso de Sonsón, en los años 2005-2006 los casos aumentan respecto al 2004 y solamente hasta el 2008, empiezan a decrecer de forma notable.

descienden hacia el año 2008⁵, la situación de orden público se normaliza paulatinamente en el municipio, dando paso a que los sonsoneños comiencen a regresar a sus territorios por cuenta propia.

Si bien en la actualidad la confrontación armada en Sonsón ha terminado⁶, las transformaciones generadas por el conflicto en el territorio, la relación de los actores armados con la población civil, las memorias de la guerra y las medidas para remendar las vidas y caminos rotos; han hilado una serie de interrogantes y respuestas que tejen el propósito de este artículo: describir las visiones de la justicia, la paz y la reparación de la población del municipio de Sonsón, y cómo estas percepciones facilitan o dificultan la construcción de paz. Teniendo como punto de partida, el hecho de que la disminución de la violencia en este territorio no se tramitó a través de un proceso de paz, sino que se dio por la vía de la pacificación armada; lo cual permitió la pervivencia de visiones encontradas frente a las dinámicas, hechos y huellas que dejó la guerra; y de versiones, testimonios e historias que han pretendido ser silenciadas, soterradas y hasta olvidadas. Por lo que, estas dinámicas y problemáticas suscitan una serie de preguntas que potencian los aportes de este trabajo frente al entendimiento de la construcción de paz en Colombia: ¿Cómo se tramita el posconflicto en territorios donde no existió un consenso entre los actores armados, ni entre la población? ¿Qué relación hay entre las formas de relacionarse con el territorio y las nociones sobre justicia, paz y reparación que tienen los habitantes del municipio de Sonsón?

Para dar respuesta a estos interrogantes, una de las estrategias metodológicas utilizadas fue la memoria, con la cual se identificaron los sentidos que los habitantes del municipio asignan al pasado, al presente y al futuro de sus historias colectivas e individuales. Además, permitió explorar las formas en las que estas personas se relacionan con la naturaleza y las maneras en las que entienden la vida campesina; así como su perspectiva sobre sus problemáticas y prerrogativas. Por lo que, al finalizar este trabajo se encontró que, en Sonsón existen tensiones y

⁵ Para 2006 tiene lugar el proceso de desmovilización de las ACCM en Puerto Triunfo, donde 990 de sus miembros se acogen a la Ley de Justicia y Paz. Posteriormente, en 2008 Elda Neyis Mosquera García, alias Karina, quien comandaba el Frente 47 de las FARC-EP, se entrega a las autoridades colombianas en la vereda la Soledad el municipio de Sonsón.

⁶ Aún existen hechos de violencia generados por las disputas de pequeños grupos por el control del microtráfico. Por ejemplo, en el 2021 fueron asesinadas dos personas bajo la modalidad del sicariato. Ver: <https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/dos-hermanos-victimas-de-doble-homicidio-en-ataque-de-sicarios-en-sonson>. Además, en los últimos años se han registrado amenazas a líderes sociales y ambientales del municipio e incluso la muerte de algunos de ellos. Ver: <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/investigacion-asesinato-de-lider-social-en-sonson-antioquia-340452>.

luchas tanto por los sentidos del pasado y del conflicto armado, como por las formas en las que se entiende y se planifica el territorio; lo cual puede generar nuevos desequilibrios, niveles de destrucción social y medioambiental; que pongan en jaque las pretensiones de construcción de paz en este municipio.

1. Diseño y reflexión metodológica:

En esta investigación se apeló al estudio de caso, el cual se refiere: “al estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad es circunstancias concretas” (Stake, 1998). Se elige el estudio de caso, porque permite estudiar a fondo la especificidad del contexto de Sonsón e indagar sobre las perspectivas de dicha población sobre la paz, la justicia, la reparación, el conflicto armado y su relación con los actores armados; atendiendo a los escenarios locales, las prácticas cotidianas y los discursos en los que la política y lo político desbordan los espacios institucionales. Además, se utiliza un método mixto para explorar no solo los marcos de pensamiento, propuestas, discursos, posturas políticas y maneras de ver el mundo de los diferentes actores que se relacionan en Sonsón, sino también los datos estadísticos que arrojan información sobre los niveles de victimización en la zona y el número de personas beneficiadas con los programas de justicia, reparación y paz implementados en el municipio

A lo largo del trabajo de campo se retomaron diversas técnicas de investigación como la entrevista, la observación, la observación participante, la revisión de archivo⁷ y el diario de campo, que permitieron hilar no solo las disputas entre las diferentes visiones de la paz, la justicia y la reparación, sino que además arrojó pistas sobre cómo se configuran las problemáticas por las que atraviesa la construcción de paz en el municipio. Además, la posibilidad de estar en el municipio, conversar con diferentes personas⁸ y participar de diferentes actividades abrió paso a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se fueron construyendo las diferentes visiones sobre estos conceptos? ¿Por qué priman ciertos discursos respecto a la construcción de paz en el municipio?

⁷ Se revisaron algunas actas y documentos oficiales del archivo de la alcaldía municipal y el archivo de la Memoria de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón.

⁸ Para los propósitos de esta investigación, la contrastación de voces fue determinante. No solo se tuvo contacto con víctimas tanto de la zona rural como urbana. También, se conversó con funcionarios públicos (personero, secretario de asistencia rural y medio ambiente, enlace de víctimas, funcionario de la casa de la cultura), líderes sociales y comunitarios, integrantes de la mesa de participación, miembros de la mesa de víctimas, líderes políticos, funcionarios de administraciones anteriores, académicos, campesinos, miembros de movimientos sociales, funcionarios de algunas multinacionales de monocultivo de aguacate.

¿Por qué prevalece una versión oficial del conflicto armado en Sonsón? Sin embargo, llevar a cabo esta investigación en un contexto institucional donde existía cierta reticencia a que accediera a los archivos municipales, donde había quienes consideraban que el conflicto debía ser sepultado⁹ y donde era latente la desconfianza hacia una persona que quisiera escudriñar los resquicios del conflicto armado; supuso un reto importante.

Al principio, generar lazos de confianza con las personas fue difícil, no solamente porque era alguien externo al municipio, sino porque hablar de la guerra es sumamente complejo. Algunos de los miembros de esta comunidad el conflicto los había trastocado de una manera irremediable, por lo que durante este trabajo se abogó por el respeto a la vida y sufrimiento de estas personas. Así que, a través de las entrevistas, no se indagó directamente por los hechos victimizantes, sino por sus “historias de vida”¹⁰, ya que sus experiencias, acciones y pensamientos desbordan los sucesos que en algún momento los posicionaron como víctimas del conflicto armado. Por lo tanto, a través de las entrevistas, se fue “generando una relación de confianza basada en lazos establecidos entre el que habla y el que escucha, sobre todo cuando el ámbito de la entrevista es el espacio privado” (Catela, 2000, pág. 70). En este espacio privado, no existe temor a que “lo dicho” irrumpa en el mundo de la publicidad y pueda generar estigmatización, señalamiento y acciones violentas para quien da su testimonio. Sin embargo, hay momentos en los que estas fronteras entre lo público y lo privado son difusas y porosas, por lo que “lo dicho” puede ser difundido a través de la escritura académica. Sin embargo, como lo menciona Catela (2000), no todo lo que se manifiesta en las entrevistas traspasa esta frontera cultural, especialmente cuando los testimonios están relacionados con situaciones límite nacidas de la violencia política.

Esta situación que pone de relieve Catela (2000), la experimenté en varias entrevistas, con expresiones puntuales como: “Quiero que mi testimonio sea de carácter anónimo”, “Yo le cuento y puede utilizar lo que acabo de decir, pero no lo sostengo en público”, “Hay varia gente que sabe lo que pasó, pero por temor no hablan”. Por lo que, estar frente a las memorias de la guerra trajo

⁹ Algunos miembros del partido Conservador Colombiano que llevan varios años implicados en la política del municipio y otros miembros del Partido Centro Democrático con los que me entrevisté, manifestaron que el conflicto armado era un asunto clausurado en este territorio. Incluso, expresaron que ya no era necesario hablar de víctimas del conflicto armado en la zona rural del municipio, sino que estas personas debían ser insertadas en una lógica de producción capitalista asociada a la comercialización del cultivo de aguacate y de frutos exóticos para que a través de trabajo y esfuerzo superen su condición marginal.

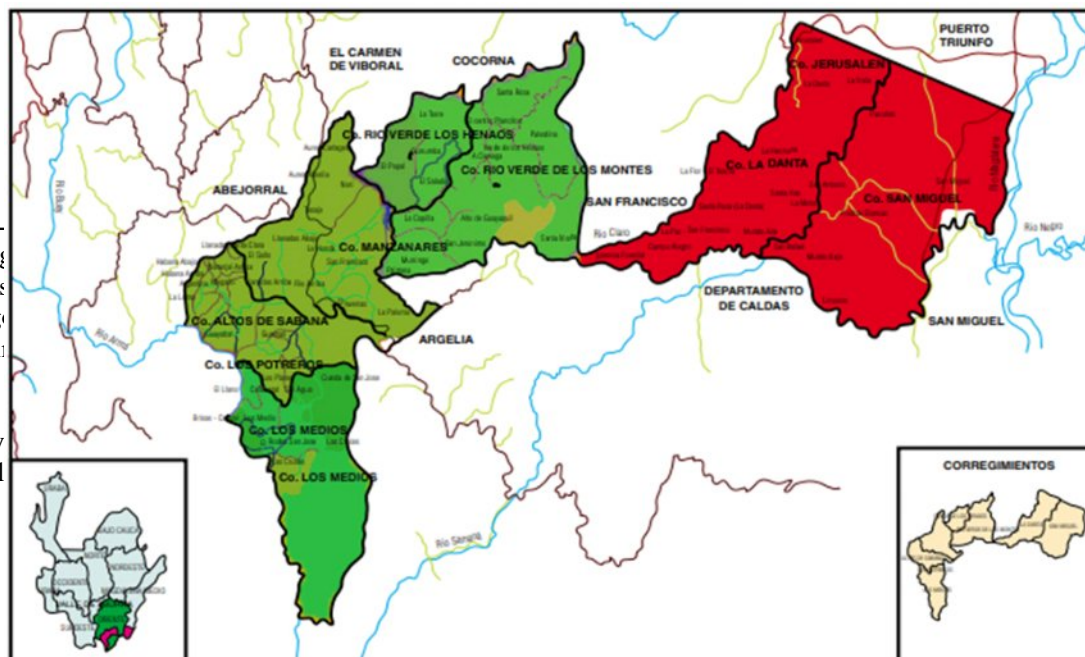
¹⁰ “Los métodos de historias de vida o las biografías sociales contribuyen a la tarea de reconstrucción de memoria histórica y, en particular, a la dignificación de la memoria de las víctimas” (CNMH,2013, pág. 102), ya que como plantea (Portelli, 1991), el relato de vida y su biografía social recuperan la identidad del individuo y su legacia para el futuro.

consigo el dilema de la seguridad de estas personas, pues, pese al silencio de las armas, en Colombia no puede afirmarse que la guerra ha cesado; por lo que el miedo aún se instala como amenaza permanente sobre la vida cotidiana de quienes estuvieron en medio del fuego cruzado. Por lo tanto, fue menester tomar estrictas disposiciones para salvaguardar la identidad de estas personas, sus testimonios y la información recolectada durante el trabajo de campo; sobre todo ante las amenazas y estigmatizaciones que líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos denunciaron durante la entrevistas.

Finalmente, Sonsón es un municipio vasto y diverso, pues si bien gran parte de su territorio está ubicada en la zona páramo, también cuenta con tierras bajas en el Magdalena Medio, que limitan con los departamentos de Boyacá, Caldas y el municipio antioqueño de Puerto Triunfo¹¹. Además, debido a su configuración territorial, el casco urbano comprende solamente el 1% de la totalidad del territorio, por lo que la zona rural es de gran extensión y alberga a la mayor parte de la población. Por lo tanto, existen corregimientos en la zona rural tan distantes del casco urbano¹², que para llegar hasta allí es necesario transportarse en chivero o en caballo; y ni hablar de aquellos que se ubican a la vera del Magdalena Medio, donde el viaje puede tomar unas siete horas desde la zona urbana. Por lo que, realizar el trabajo de campo en un territorio tan fragmentado, amplio y variopinto no solamente supuso un desafío para los propósitos de esta investigación, sino que permitió concluir que estas condiciones territoriales tan disímiles y este distanciamiento entre los diferentes corregimientos y el casco urbano, fueron el caldo de cultivo propicio para que los grupos armados se ubicaran en las zonas más apartadas del municipio en busca de protección y, a su vez, lograran reconfigurar la vida social, política y económica de estos territorios según sus propósitos y perspectivas.

¹¹ En la página económica de antioquia.gov

¹² Especialmente se encuentran escenarios de guerrillas y por lo que l



Sonsón se los las os;

Figura 1: mapa municipio de Sonsón. Los territorios de color verde representan los corregimientos que se encuentran ubicados en la zona páramo, mientras que la zona de color rojo representa las tierras cálidas del municipio en el Magdalena Medio.

Fuente: Instituto Popular de Capacitación, 2011.

2. Aproximación teórica: perspectivas de la justicia, la reparación y la paz.

2.1 Perspectivas de la justicia: visiones “desde arriba” y “desde abajo”

Durante los últimos veinte años, la justicia transicional ha llamado la atención de expertos en estudios de paz y derechos humanos, académicos, movimientos sociales y diseñadores de políticas públicas, que desde diferentes escenarios han reflexionado sobre los procesos sociales, jurídicos y políticos que entrañan los reclamos de justicia de las comunidades frente la comisión de violaciones a derechos los humanos. De acuerdo con Gómez (2015), el término justicia en estos procesos de transición, ha estado usualmente asociado a la idea de justicia retributiva, la cual se relaciona con los mecanismos judiciales que permiten procesar y castigar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la predominancia de la justicia retributiva en los procesos de transición política, que tuvieron cierta aceptación en los momentos iniciales de la formación del campo de justicia transicional, han sido objeto de múltiples debates, especialmente a lo largo de la última década.

Por lo tanto, en los últimos años, la justicia transicional se ha convertido en un escenario de disputa en el que confluyen diferentes actores con discursos y propuestas que pretenden orientar

los mecanismos jurídicos y políticos para responder a las demandas de paz y de justicia que se presentaron en territorios de gran conflictividad. Por lo que, los actores sociales entran en una intensa disputa sobre “cómo definir el conflicto político, la instauración del nuevo momento fundacional y, de qué manera los mecanismos legales deben diseñarse para promover y facilitar los eventuales acuerdos políticos” (Gómez, 2015, pág. 148). Es en este escenario donde surgen visiones contrapuestas entre los intereses de los grupos de poder y las perspectivas de las víctimas o de los grupos social y políticamente excluidos, entonces: ¿Qué ocurre cuando las élites políticas optan por establecer formas de justicia afines a sus intereses y que no tienen presentes las prerrogativas de las víctimas y de los sectores más marginados? Es en este contexto donde tienen cabida las categorías de “justicia transicional desde arriba” y “justicia transicional desde abajo. La visión “desde arriba” aborda las relaciones entre política y derecho desde una mirada fundamentalmente institucional, que hace énfasis en el diseño de políticas públicas, marcos jurídicos y el rol de las élites políticas. Por su parte la perspectiva “desde abajo” se refleja “ en la participación de actores no estatales en el diseño político y la aplicación de mecanismos de justicia transicional, y por la otra, en las prácticas no formales de resolución de conflictos en espacios locales” (Gómez, 2015, pág. 152).

Ambas categorías, permitieron explorar las visiones contrapuestas de la justicia en el municipio de Sonsón. A través del trabajo de campo, se encontró que en el municipio se han diseñado políticas desde el andamiaje institucional, que, por un lado, han servido simplemente como paños agua tibia ante la situación de exclusión política, social y económica que han atravesado las víctimas de Sonsón; y que, por el otro, han dejado de lado la búsqueda de la verdad y el deber de memoria. En contraste, las víctimas han configurado su propio significado de justicia a partir de la construcción de memoria sobre lo acaecido durante el conflicto armado, disputando así la versión oficial¹³; la cual ha pretendido soterrar y silenciar aquellos testimonios que se resisten al olvido, que apelan a la verdad y al esclarecimiento de lo sucedido durante la guerra. Además, proponen sus formas de hacer justicia, las cuales empiezan por modificar el rótulo de víctima por el de sobreviviente, lo cual implica que están en capacidad de reclamar sus derechos y de formar

¹³ La memoria oficial se refiere a todo discurso o narrativa hegemónica proveniente del Estado y que tiene la finalidad de persuadir o invisibilizar otras visiones sobre lo ocurrido en contextos de violencia. (Zuluaga, M. 2015. p. 91). Es decir, desde el Estado se marginan otros sentidos de la realidad. Jelin describe la memoria oficial como “una lucha política activa acerca del sentido de lo ocurrido, pero también acerca del sentido de la memoria”. (Jelin, E. 2002, p.).

parte activa de los procesos de reparación, paz y reintegración desde sus saberes y su concepción del mundo.

2.2 La reparación estatal ¿una reparación transformadora?

En el año 2011 se pone en marcha en Colombia la Ley 1448, dentro de la cual, en un marco de justicia transicional, se establecieron medidas para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas¹⁴ del conflicto armado interno. La reparación integral comprende las siguientes medidas: medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, restitución, medidas de indemnización. De manera más específica, las acciones de reparación que se contemplan en el ordenamiento jurídico colombiano son: reconocimiento como persona afectada en el contexto del conflicto armado, atención psicosocial, médica y jurídica de las víctimas y familiares, restitución de tierras, esclarecimiento de los hechos victimizantes, indemnización económica por los daños sufridos, actos simbólicos para honrar y reconocer a las víctimas, mejoras a la infraestructura tanto colectiva como individual, entrega de servicios sociales. Por lo tanto, la reparación, no puede entenderse como un acción específica, sino como un proceso que implica diversas formas de resarcir los derechos de las víctimas de manera colectiva e individual, permitiendo que se restablezca el tejido social y la convivencia, para que estos sujetos puedan reconstruir y configurar su proyecto de vida de acuerdo con sus tradiciones y cosmovisión.

Respecto a esta perspectiva de la reparación integral, Uprimny y Saffon (2009) plantean que estas medidas tienen como objetivo “transformar las relaciones de subordinación y exclusión social que se encuentran en el origen del conflicto que busca ser superado y que en todo caso aparecen inicuas desde una perspectiva de justicia distributiva” (p. 34). Por lo tanto, en el municipio de Sonsón intenté rastrear si las medidas de reparación lograron transformar las condiciones de subordinación y exclusión social y política de las víctimas del conflicto armado.

Mi paso por estos territorios me permitió entender que estas comunidades experimentan una situación de marginalidad política que es previa a los hechos de violencia acontecidos durante el conflicto armado, en tanto son sujetos que han estado desprovistos de su estatus de ciudadanía, “entendida ésta como la pertenencia efectiva a un conjunto social concreto beneficiado por las

¹⁴ “Se consideran víctimas, (...), aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985” Artículo 3, Ley 1448 d 2011.

garantías que ofrecen las instituciones” (Pécaut, 1998, pág. 20). Por tanto, son poblaciones que han experimentado problemas estructurales “en términos de goce de derechos ciudadanos y de satisfacción de sus necesidades básicas” (Romero y Castaño, 2018, pág. 30). Sin embargo, estas condiciones de precariedad y marginalidad siguen latentes en la zona rural del municipio a pesar de las medidas de reparación implementadas. Por lo que, estas comunidades entienden la reparación como la superación de sus condiciones de pobreza y la existencia de garantías para ejercer su oficio campesino. Además, de su aparición en espacios de interpelación donde puedan formar parte de la planeación y usos del territorio.

2.3 Entre la paz democrática y la paz neoliberal

Para Johan Galtung (2003), la paz debe ser más que la mera ausencia de un conflicto violento (entendida como paz negativa); los Estados (o cualquier grupo dentro de un conflicto) deben buscar relaciones de colaboración y apoyo mutuo para lograr una paz positiva. Por lo que, en el momento del cese al fuego el trabajo para construir la paz no está sino a punto de comenzar; ya que “la construcción de paz debe coincidir con una situación de justicia en la que las relaciones intergrupales sean de tipo cooperativo, y estén vigentes los derechos humanos” (Harto de Vera, 2016, pág. 129). Sin embargo, la modernización neoliberal de estas últimas décadas ha traído consigo visiones contrapuestas de la paz que se concretizan en disputas por entender y ordenar el territorio en Sonsón.

Está en disputa la visión de las maneras propias de habitar el territorio. ¿Nosotros qué nos disputamos aquí? La manera propia de entender cómo habitamos nosotros este territorio, cómo lo disfrutamos. ¿Que nosotros defendemos el agua por qué? Porque sin el río no pudiéramos vivir, porque el río es el medio vital. Entonces estamos disputando la manera en cómo nosotros habitamos el territorio porque nos van a imponer otra manera distinta de habitarlo (Movete, 2018, pág. 125)

Por lo tanto, para los fines de este trabajo, estas disputas se concentrarán en los conceptos de paz democrática y paz neoliberal. Entendemos por paz democrática, aquella perspectiva que aboga por el cuidado del medio ambiente, la justicia social, la dignificación del campesinado y la preservación de los modos de vida de los habitantes de la zona rural, la planificación del territorio de manera participativa y concertada. Por otro lado, la paz neoliberal será asumida como aquella

perspectiva que se sustenta en el modelo extractivista exportador¹⁵ enclavado en megaproyectos energéticos, mineros y agroindustriales; el cual reconfigura el territorio, degrada los recursos naturales, profundiza las desigualdades, engendra nuevas condiciones de violencia y genera condiciones de marginalidad para los habitantes de las zonas rurales.

3. Conflicto armado en el municipio de Sonsón

“El viernes 23 de agosto de 1996 se inauguraron aquellas jornadas de horror con letreros pintados en las paredes del pueblo que decían: muerte a sapos y colaboradores de la guerrilla. Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” (Gallego, 2019, pág. 5). Así relata el libro *Fin de semana negro* de Juan Camilo Gallego, la incursión del paramilitarismo en el casco urbano de Sonsón. Durante 4 días en agosto de 1996, los habitantes del caso urbano vivieron los embates del conflicto armado de la zona rural, las dinámicas de la guerra cambiarán de manera drástica cuando confluyan en el territorio tanto grupos paramilitares, como grupos guerrilleros (FARC-EP y ELN) y el Ejército.

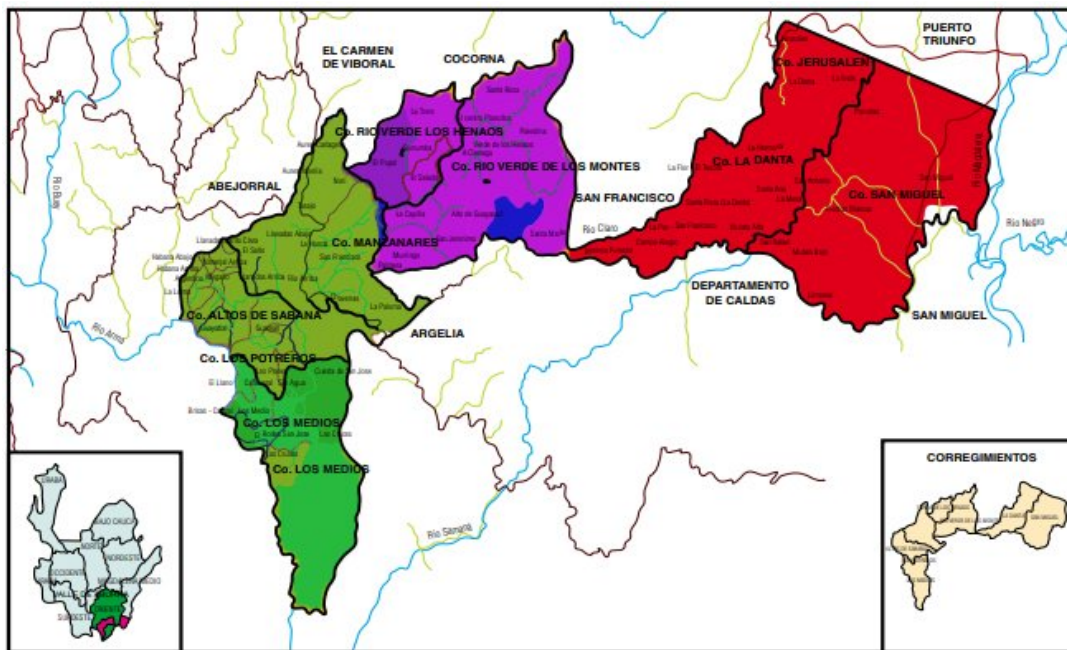


Figura 2: presencia de grupos armados en el municipio de Sonsón

Fuente: Instituto Popular de Capacitación, 2011.

¹⁵ El extractivismo remite a las actividades que utilizan o explotan bienes que son considerados no renovables como por ejemplo el petróleo, el gas o los minerales. Además, actualmente este concepto se ha ampliado bajo la fase neoliberal que altera el carácter no renovable de los bienes naturales afectados donde, “por razones políticas y tecnoproductivas, la tasa de extracción se vuelve mucho más alta que la tasa de renovación del recurso” (Algranati, Seoane y Taddei, 2013, pág. 25)

En la zona de color morado formaron sus lugares de asentamiento las guerrillas de las FARC- EP y el ELN, en la región páramo del municipio. Por su parte, los paramilitares se asentaron en la zona de color rojo, ubicada en las tierras cálidas del municipio en el Magdalena Medio. Sin embargo, los paramilitares también tuvieron presencia importante en el Alto de Sabanas (un corregimiento ubicado en la región páramo), donde, incluso, tuvieron una emisora. Por otro lado, el ejército entró con fuerza en los lugares donde se ubicaban las guerrillas para emprender su lucha contrainsurgente.

A partir de la figura anterior, se concluye que Sonsón es un municipio amplio en extensión territorial, en el que se presentaron dinámicas del conflicto armado disimiles de acuerdo con la ubicación geográfica y la presencia de actores armados en el territorio. Por lo tanto, en las zonas de asentamiento de paramilitares y los grupos guerrilleros se presentarán maneras de estar en el territorio y de relacionarse con la población de manera específica. De acuerdo con Cárdenas (2015), en los territorios en los que se asientan los grupos paramilitares, por lo general se presentan inversiones en grandes monocultivos, ganadería extensiva y grandes proyectos, dándose una gran valorización de la tierra, mientras que en los lugares donde se ubican las guerrillas, existen casos en los que se llegaron a consolidar comunidades campesinas que se dedicaron a la agricultura a pequeña escala y en muchas ocasiones al cultivo de la hoja de coca, generándose habitualmente un proceso de desvalorización de la tierra. Por lo tanto, a continuación, se observarán estas lógicas disimiles de conflicto armado en el municipio de Sonsón, según la presencia de los actores armados y su ubicación geográfica en el territorio.

3.1 Presencia guerrillera en el municipio de Sonsón: las dinámicas del ELN y las FARC-EP

Respecto a las guerrillas se encuentra que, en un primer momento, es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quien tiene presencia en el municipio. Para los años ochenta en las veredas de Palestina y Santa Marta, en Rio Verde de los Montes, el ELN creó escuelas de formación política y militar. Además, se erigió como autoridad y paraestado llenando la ausencia o abandono institucional con su propia doctrina y pensamiento” (Gómez, 2008, pág. 28). Sin embargo, posteriormente fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) quienes ocuparon un papel central como insurgencia en el municipio. Hacia finales de los años ochenta, los frentes 9 y 47 de las FARC-EP, comenzaron a operar en el sur del Oriente Antioqueño, en Sonsón, Argelia, Nariño y San Francisco. En las veredas, El Popal, El

Salado, Zurrumbal, La Torre y el Cedro “construyeron campamentos, internaron secuestrados, planearon operativos, mantuvieron el control y se extendieron al corregimiento Río Verde de los Montes en Sonsón, entrando en disputa con el ELN” (Gómez, 2008, pág. 30). Por lo tanto, el posicionamiento de las FARC-EP como la guerrilla más fuerte de la región contribuyó a la desaparición del ELN en el conflicto armado¹⁶.

Respecto a las FARC- EP, El municipio de Sonsón experimentó la arremetida del Frente 47¹⁷ de las FARC a manos de Elda Neyis Mosquera García “alias Karina”, quien montó uno de sus campamentos en Río Verde de los Montes en Sonsón, desde donde dominaba Nariño y Argelia, en Antioquia, y Samaná, San Félix, Pácora, Aguadas y Pensilvania, en Caldas. De acuerdo con los testimonios de los pobladores, esta guerrilla investigaba quiénes eran las personas que vivían en la región, realizaban censos y llevaban un registro de quienes salían o entraban al territorio. Por otro lado, se encargaban de manejar los conflictos entre vecinos y de delincuencia común, conversando con las partes implicadas o en última instancia expulsando de la zona a aquellos habitantes que consideraban problemáticos. Por lo que, “las organizaciones insurgentes van configurando un orden interno predecible, logran así cierto reconocimiento para dirimir conflicto, controlar la delincuencia menor y organizar la población en el territorio” (Bolívar, González y Vázquez, 2003, pág. 201). Por lo tanto, como plantean (Bolívar, González y Vázquez, 2003, pág. 201), se convierten en un proto-estado con la función semi-estatal de ofrecer orden y seguridad a cambio de lealtad incondicional y obediencia absoluta, en suma, un embrión de Estado. Respecto a la lealtad condicional y obediencia absoluta, uno de los habitantes de Río Verde de los Montes, me narró qué: “las FARC usaba los registros que tenían de la gente para decir quien traía comida desde el pueblo. Como yo era arriero, me obligaban a traer comida para ayudar a la causa, sino decían que estaba con los paramilitares” (Entrevistado 10, 2019).

De acuerdo con el relato anterior y los demás testimonios recogidos de líderes sociales y campesinos que conocen o habitaron la zona de Río Verde, el importante desplazamiento que se presentó en esta zona rural del municipio, responde en gran medida a las disputas territoriales

¹⁶ “El ELN desapareció por cuenta de las operaciones desplegadas contra él entre los años 1999 y 2001, por las FARC-EP y los paramilitares, que incluyeron eventos armados y masacres. Su desplome se produce antes de entrar en acción la política de Seguridad Democrática.” (Aramburo y García;2011, pág. 106)

¹⁷ Modifican su plan estratégico a partir de la séptima y octava conferencia, en donde se plantea un “nuevo modo de operar”, lo cual se concreta en la creación de bloques y comandos conjuntos, con el fin de regionalizar la organización y lograr una avanzada en el control territorial; en donde se prioriza el accionar militar.

entre los paramilitares y la guerrilla, quienes presionaban a los habitantes para tomar partido en la confrontación armada. Así, la población vivía en medio de un contexto de violencia, conviviendo con diferentes actores armados que los vigilaban, entraban a sus casas a pedir comida o posada, los interrogaban, reclaman su lealtad y hasta los acusaban de auxiliar al bando contrario. Por otro lado, la guerrilla de las FARC-EP, sembró zozobra en este territorio con prácticas como el secuestro y la extorsión, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, en los municipios de Antioquia en los que el Frente 47 tuvo presencia, Sonsón fue el más afectado con 91 secuestros entre 1982 y 2010, con un pico que empezó en 1999 y se extendió hasta el 2001 (Conciudadanía, 2019). Por otro lado, generaron dinámicas de desplazamiento forzado, reclutamiento de menores e instalaron minas antipersonales para combatir al ejército y a los paramilitares, donde, la población civil terminó por ser víctima de esta táctica de guerra.

4.2 Presencial paramilitar en Sonsón: las dinámicas de las ACCM

Los primeros brotes de un proyecto paramilitar en el municipio surgen a finales de los ochenta a partir del grupo Los Escopeteros formado por Ramón Izasa en el Magdalena Medio para ofrecer servicios de seguridad y vigilancia, ante el accionar guerrillero. Dicho grupo pasó de tener pretensiones de autodefensa a constituirse formalmente en un grupo paramilitar, el cual fue conocido como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM).

Antes de continuar, es importante mencionar que las dinámicas territoriales que se establecen en esta zona cálida del municipio distan de las existentes en la zona páramo, donde se ubicaron las guerrillas. Por lo tanto, como plantea Madrigal (2018), la desconexión regional que existe entre ambas zonas, así como la falta de convergencia en sus dinámicas comerciales y económicas, conllevó a que esta parte del municipio asumiera por cercanía y/o distancia, lógicas de la región del Magdalena Medio, región con la que comparte rasgos socioeconómicos que contribuyeron a su configuración y consolidación como territorio. Estas lógicas territoriales y económicas adquirieron unas dinámicas durante el conflicto armado, las cuales fueron marcadas por la presencia paramilitar en la zona y las necesidades de este actor armado para financiar su proyecto político-militar en el territorio. Por otro lado, cabe destacar que esta zona del municipio de Sonsón al estar tan alejada del casco urbano fue el lugar perfecto para que el paramilitarismo ejerciera dominio, ya que lograron establecerse como autoridad en una zona donde la población

no contaba con unas necesidades básicas resueltas y donde la presencia de las autoridades municipales era de carácter transitorio.

En la década de los noventa, las ACMM se consolidaron en el territorio al encontrar nuevas fuentes de ingreso que soportaran la financiación de la estructura. Para ello, debieron recurrir a otro tipo de economías, como la explotación minera, el petróleo y la coca. Así, según Madrigal (2018), “en la zona se estableció una red de testaferros que sirvieron a las ACMM para el despojo de tierras, dichas zonas despojadas se convirtieron en sitios de explotación ganadera como forma de lavado activos o de actividades asociadas al narcotráfico” (pág. 40). Por tanto, el resultado del control de la economía por parte de los paramilitares se debe a la consolidación de un “capitalismo político donde la disponibilidad de aparatos armados, la influencia sobre el poder político regional, la generación de ingresos desde actividades ilícitas-lícitas y el respaldo de las comunidades, eran el eje de la estructura productiva y distributiva de la riqueza” (Duncan, 2015, pág. 106).

Así mismo, otras economías extractivas, como la marmolera y la aurífera, llamaron para este período la atención de los paramilitares. Este es el caso puntual de Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias “McGiver”, quien mostró interés por forma parte de la empresa encargada de la explotación de las minas de mármol ubicadas en la cabecera del corregimiento de la Danta. De acuerdo con Madrigal (2018), estos territorios eran explotados tanto por colonos, como por empresas y sociedades que se constituyeron con el fin de aprovechar el material, el cual abundaba en el sitio. Así, de acuerdo con los testimonios de la población, alias “McGiver”, habría apoyado la organización de los mineros en una cooperativa de trabajo asociado que se denominó: Asociación de Marmoleros de La Danta (ASOMARDANT), con el fin de tener control sobre las minas de explotación de mármol y hacerse con los réditos económicos que esta actividad extractiva generaba. Con la hegemonía alcanzada por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y en general, del paramilitarismo en la región del Magdalena Medio, se generaron procesos de despojo y abandono que devinieron en dinámicas de acumulación de tierras en los corregimientos de la Danta, Jerusalén y San Miguel, ya que esta autoridad de facto influyó en las dinámicas económicas y de uso del suelo de esta región. Estas dinámicas de despojo y abandono estuvieron atravesadas por amenazas, homicidios, venta forzada, muerte de semovientes, hechos de

violencia sexual, entre otros. El relato de unos de los voceros que formaron parte del proceso de desmovilización de los paramilitares en el Magdalena Medio describe algunas de estas dinámicas:

“Yo vivía en el corregimiento de la Danta con mi mamá; mi papá ya había muerto hace unos años. Por allá como en 1997 se nos estaba perdiendo el ganado. Un día vinieron los muchachos de Ramón Isaza y nos dijeron que la finca tenía comprador. Nos hicieron ir a la notaría y tuvimos que firmar bajo presión unas escrituras. Nos dijeron que en un mes nos entregaban la plata de la finca, pero nunca nos dieron nada. Y nos tuvimos que ir para el corregimiento de San Miguel a vivir con mi tío. Y eso que no fuimos los únicos a los que les pasó algo así” (Entrevistado 15, 2020).

Además, de acuerdo con el testimonio de un habitante que se desplazó del Magdalena Medio al casco urbano del municipio de Sonsón, con la reconfiguración territorial y económica que se dio durante el dominio paramilitar, se trastocó la vocación productiva del suelo, la cual terminó por afectar las condiciones de subsistencia de los campesinos:

“Yo vivía en el corregimiento de San Miguel, eso allá estaba llenito de cultivos de yuca, maíz y arroz, pero cuando la gente de Isaza empezó a mandar por ese lado, se nos acabó el trabajo jornaleando, porque fueron comiendo y comiendo terreno hasta que sacaron a los campesinos de esa zona¹⁸. Entonces, uno ya veía era puras vacas y hasta coca” (Entrevistado 5, 2019).

Por otro lado, al mismo tiempo que los paramilitares infundieron terror, zozobra y muerte en los territorios del Magdalena Medio sonsoneño, lograron consolidar una suerte paraestado¹⁹, al ser capaces de entronizar un poder económico, político y social de tal significancia que poseen “un

¹⁸ Retomando los hechos que narra el entrevistado, no es sorprendente que exista una reconfiguración de la economía y de la vocación del suelo que propenda por la realización de megaproyectos y de actividades económicas que impliquen la concentración de predios y de gran capital en la zona del Magdalena Medio, ya que los territorios que fueron “producto del despojo paramilitar, presentaron una economía creciente, se hicieron inversiones en grandes monocultivos, ganadería extensiva y grandes proyectos, dándose por regla general una gran valorización de la tierra” (Cárdenas, 2015, pág. 162).

¹⁹ “Los paraestados surgen bien sea porque el Estado legalmente constituido cede poder a un grupo insurgente o, simplemente, porque establece acuerdos para el control ante el embate de un opositor que le quiere arrebatarse a través de la violencia los derechos que por Constitución le pertenecen.” (Ortiz, 2010, pág. 82).

control casi que absoluto sobre una gran parte del territorio y en éste imponen sus leyes y normas, como lo haría cualquier Estado” (Ortiz, 2010, pág. 79). Así, tomaron decisiones, invirtieron cuestionaron a funcionarios públicos y lograr imponer su autoridad ilegal, ante la legitimidad del gobierno local. Además, a partir de 1996, las ACCM retoman la ejecución de obras públicas como lo fueron: la construcción de escuelas, la pavimentación de vías veredales, la adecuación de centro de salud. Por lo tanto, algunos de los pobladores de la región, encontraron en el proyecto paramilitar una forma de mejorar sus condiciones de vida en las veredas y en aquellas zonas que se encontraban tan alejadas del casco urbano del municipio de Sonsón. Al respecto, María Teresa Uribe (2001), expresó que el poder que atraviesa a las organizaciones armadas, no se logra únicamente a través de la coerción y la represión; sino que también se manifiesta en forma de consensos. Puesto que este poder, supone un acuerdo de facto entre las masas con el grupo dominante, o mejor aún, con el proyecto político de la organización que está en la cúspide de las relaciones de poder. Por lo tanto, cuando esto ocurre estamos frente a una hegemonía política²⁰.

4. Visiones de la justicia en Sonsón: perspectivas “desde arriba” y “desde abajo”

4.1 Formas de justicia adoptadas a partir de una perspectiva “desde arriba”

Las formas de justicia adoptadas por las elites del municipio han tendido a silenciar las voces y las prácticas de las víctimas, activistas y defensores de derechos humanos. Esto se concluye a partir de las entrevistas realizadas a líderes políticos y miembros de familias de importante tradición en Sonsón, en su mayoría militantes del Partido Conservador Colombiano y de manera más reciente del Centro Democrático, quienes ven innecesario que las víctimas exijan y promuevan políticas de memoria que les permita el esclarecimiento de la verdad sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado, para así exigir justicia ante las autoridades. Esta postura responde a una visión, según la cual, la guerra debe quedar en el pasado y los sucesos atroces que desencadenaron la vulneración a los derechos humanos deben ser enterrados y olvidados. Además, algunos de ellos, sostenían que en el municipio ya no debía hablarse de víctimas, que el único grupo en situación de vulnerabilidad eran los campesinos y que, para que estos superaran su condición de marginalidad, debían insertarse un modelo de desarrollo económico dentro de las lógicas del neoliberalismo.

²⁰ El concepto de hegemonía en Gramsci se refiere a la estrategia desplegada por un determinado grupo social para generar la aceptación de sus propias posiciones ideológicas entre los otros grupos sociales por medio de la persuasión y el consenso, a través de lo cual esa clase social logra establecer su dirección o liderazgo ideológico sobre las otras clases sociales.

Por otro lado, al solicitar información vía derecho de petición sobre los proyectos y programas que se han adelantado en el municipio durante las 2012-2015 y 2016-2019, en cuanto a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado. Se encontró que en la administración 2012-2015 el componente de Verdad y Justicia que comprende: medidas de construcción de memoria, protección y preservación de la memoria histórica, difusión y apropiación colectiva de la verdad y la memoria; no contó con un ningún tipo de acción o inversión presupuestal. Por su parte, en el periodo 2016-2019, se realizaron solamente cuatro acciones de memoria que se concentraron en su mayoría en la realización de actos conmemorativos. Además, el acompañamiento que se les ofreció a las víctimas en cuanto a las medidas de justicia, verdad y reparación existentes, se limitó a tener un carácter informativo y orientador sobre los procesos que las víctimas deben seguir para exigir estos derechos.

Por otro lado, las políticas surgidas a partir de esta visión “desde arriba” de la justicia, han cumplido la función de ser un paliativo ante las dinámicas de exclusión política, social y económica por las que han atravesado las víctimas. De acuerdo con los testimonios de líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex funcionarios del municipio, las políticas que se han realizado en materia de justicia social no han sido lo suficientemente consistentes para impactar de manera positiva la vida de la población más vulnerable del municipio. De acuerdo con Bloomfield (2015), “la justicia social (que incluye tanto la justicia distributiva como la económica), apunta a que todos los “bienes” de la sociedad (económicos, políticos y sociales) se comparten de manera equitativa” (pág. 24). Por lo tanto, si esta justicia no se consolida después de la violencia, ¿Cómo puede ser posible la construcción de escenarios de paz, donde las comunidades vulneradas permanecen en una condición de marginalidad política, económica y social? Respecto a este punto, el testimonio de un ex funcionario de la alcaldía de Sonsón, que se ha enfocado en brindar asesorías sobre la política de víctimas en el Oriente antioqueño; permite dar luces sobre esta problemática:

“Partamos del hecho de que acá los procesos de regreso de la población desplazada a la zona rural fueron asumidos inicialmente por parte por las mismas víctimas. Por otro lado, claro, acá en el municipio se han hecho programas y proyectos para atender a la población víctima sobre todo campesina, pero muchas veces esas políticas son formuladas desde el desconocimiento del territorio y las necesidades de la población que lo habitan. Sí, acá a

usted le pueden decir, que, en Sonsón, se hicieron dos fases del programa *Familias en Su Tierra*²¹, cuya población objeto fueron 192 familias del corregimiento Rioverde los Henaos y 520 familias en los corregimientos de Rioverde los Montes y los corregimientos del Magdalena Medio (La Danta, Jerusalén y San Miguel). Pero, en la implementación, se ve la desconexión entre la realidad de esas comunidades rurales y las maneras cómo el ordenamiento local pretende “ayudarles” con su proyecto de vida.

La manera de ver el mundo de un campesino es muy distinta a la de uno que ha vivido en la ciudad, ahí es cuando hay un quiebre. Entonces, los encargados de implementar el programa que duraba a unos 24 meses querían organizar la vivienda rural como si fuera la de ellos. Después, les enseñaban a construir una huerta casera o les decían que iniciarán un proyecto productivo. Entonces, empezó a haber retrasos en la entrega de los insumos para los huertos. A otros no se les hizo el acompañamiento técnico suficiente para los proyectos productivos. A otros, se les entregó dinero en vez de materiales para las huertas caseras y destinaron la plata en otras necesidades. Y bueno, al final no se vieron los beneficios de estabilización socioeconómica para los que se creó el programa” (Entrevistado 7, 2019).

De acuerdo con lo anterior, estas políticas pensadas “desde arriba”, han ignorado el hecho de que la construcción de justicia en el territorio está atravesada por lógicas complejas que no puede reducirse a una dimensión institucional, ni al diseño de un mecanismo en particular. En tanto, estos son procesos que requieren de la participación de las víctimas, defensores de derechos humanos, movimientos sociales y de otros actores no institucionales; para pensarse múltiples herramientas y dinámicas sociales que contribuyan a la elaboración de sentidos democráticos en materia de justicia.

4.2 Formas de justicia adoptadas a partir de una perspectiva “desde abajo”

²¹ El programa *Familias En Su Tierra*, hace parte de la Política Pública de Retornos y Reubicaciones iniciada por el Gobierno nacional de Juan Manuel Santos con la Ley 1448 de 2011. Es un programa de corta duración -24 meses- planeado como una estrategia de estabilización socioeconómica para las familias reubicadas o retornadas. La focalización está a cargo de la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas, siendo esta la encargada de seleccionar a los hogares dependiendo de su nivel de vulnerabilidad. Una vez inscritos los hogares en el programa, se debe contratar una entidad acompañante que se encargue articular los componentes y ejecutarlos. Estos componentes son: incentivo económico para el retorno, seguridad alimentaria, carencias básicas habitacionales, promoción de idea productiva.

Los embates del conflicto armado y del desplazamiento forzado llevaron a que desde 1998 la población sonsoneña se reunieran en el casco urbano del municipio para construir iniciativas de participación y resistencia frente a la violencia que se vivía en sus territorios. Entre estas iniciativas surgen la “Asamblea Comunitaria Unidos por el Desarrollo y la Democracia”, los proyectos “De la Casa a la Plaza”, “Jóvenes por la Paz” y la formación de “Promotoras de Vida y Salud Mental –PROVISAME²²”. Posteriormente gracias al trabajo conjunto de la población sonsoneña, es posible la conformación en el año 2007 de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón, la cual se convertirá en un “escenario para reclamación de derechos, la formación y la visibilización de las víctimas del conflicto armado, dando continuidad a procesos locales y regionales de construcción de paz” (González, 2015, pág. 13).

Uno de los grandes logros de esta asociación fue la posibilidad de abrir espacios de participación, expresión y resistencia a las víctimas del conflicto como lo fue en el año 2009 la apertura de *El Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón*. El cual surge de la mano de la Universidad de Antioquia, por medio del apoyo del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión –BUPPE– con el acompañamiento de la investigadora del Instituto de Estudios Regionales, Isabel González Arango. Por medio de las colchas de retazos, las muñecas quitapesares, las telas colectivas y los bordados, son creaciones que se convierten en documentos políticos que, “entrelazadas y puestas en lo público, aportan a la memoria histórica y la reintegración comunitaria desde un enfoque diferencial, resignificando la situación de ser víctimas sobrevivientes” (González, 2015, pág. 15). Además, a través de los testimonios de algunas de sus integrantes pude comprender que este espacio no solo se convirtió en la posibilidad para sanar sino en una forma de resistir, buscar justicia y apelar por la participación política en espacios de toma de decisiones.

“Nosotras éramos mujeres del campo. Usted sabe, criábamos a nuestros hijos, sembrábamos, lidiábamos a las bestias, estábamos pendientes del marido. Pero llegó la guerra y nos tuvimos que venir para acá (el caso urbano) y pasamos tiempos muy duros, porque la mayoría a causa de la guerra nos convertimos en madres cabeza de familia y ya hay unas muy mayores. Entonces se imaginará lo difícil que fue, hasta empezamos con el

²² Para conocer más de estos procesos de acción colectiva por parte de la población sonsoneña, remitirse al trabajo de grado *Perspectivas de la paz, la justicia y la reparación: el caso de Sonsón, Antioquia*, donde a través de una línea del tiempo se describen las acciones de resistencia, memoria y sobrevivencia de estas personas.

Costurero, donde nos empoderamos. Ahí es que nosotras decimos que empezamos a sanar, porque sacamos los que teníamos dentro y nos apoyábamos entre todas.

Por eso es que yo pienso que, si nosotras fuimos víctimas y eso se tiene que reconocer, pero no por pesar, sino porque es como le dijera yo, es lo justo. Si a usted alguien le hace algo, le tiene que responder. Pero yo digo que también somos sobrevivientes, somos berracas; levantamos a nuestros hijos, pero también estamos contando lo que pasó, lo que nos dolió y lo que queremos. Hay gente que piensa que nosotros queremos que nos den todo regalado, pero así no es la cosa. Queremos que nos colaboren para tener una vida digna, pero nosotros queremos trabajar. Queremos que nos oigan, por qué quien más que nosotras para saber lo que pasó y lo que necesitamos. Nosotros lo que buscamos es la verdad, la dignidad, que podamos vivir mejor que en el campo, sin pasar necesidades”. (Entrevistado 18, 2020)



Figura 2 y 3. Colchas de retazos y bordados elaborados por las integrantes del *Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón*, donde plasman las dimensiones del daño que ocasionó la guerra, así como el justo y urgente reconocimiento de sus historias, memorias y familiares fallecidos.

Fuente: hacemos memoria.

Por otro lado, en el 2016 surgió el Salón de la Memoria en Sonsón como una iniciativa del Costurero de Tejedoras por la Memoria y la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio de Sonsón con el acompañamiento de la Universidad de Antioquia y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Si bien este espacio se ha convertido para las víctimas en un lugar importante de memoria, de identidad, de justicia, de sentido y de referencia de lo sucedido en el marco de la

guerra; la municipalidad y demás entidades gubernamentales no han reconocido y apoyado el museo como un lugar de memoria y reparación. Es así como la manutención de este lugar ha corrido por cuenta de las víctimas y de ciudadanos que están interesados en que los jóvenes conozcan y reflexionen sobre lo que aconteció en su municipio. Por eso, González (2015) sugiere que este tipo de espacios “deben ser reconocidos a través de una política clara que les otorgue el valor que realmente tienen como espacios pedagógicos que promueven reflexiones sobre lo que somos como sociedad” (pág. 17)

A través de las acciones colectivas de resistencia y memoria llevadas a cabo por la población sonsoneña podría plantearse que su labor en la construcción de paz y durante el posconflicto, no se limita a la de un testigo que busca narrar el paso de la guerra por su vida y su territorio. Sino que es un quehacer “desde abajo”, “que a través de metodologías participativas encamionadas al diálogo de saberes y a la coproducción de conocimiento reconstruyen el pasado con acciones en el presente y enseñan formas de conocimiento, historias diferentes a la oficial, hegemónica o institucional” (González, 2015, pág. 11). Por lo tanto, esta comunidad construye sus propios significados y formas de justicia, las cuales no se agotan en la justicia penal del Estado o en sus reparaciones administrativas. Sino que, como lo plantea Mika (2009), esta comunidad parte de una justicia transicional “desde abajo, como la inclusión de la perspectiva de las víctimas sobre cómo hacer justicia, para visibilizar propuestas que interpelen al Estado y constructivamente aporten a la paz desde prácticas cotidianas que potencien las capacidades de las comunidades locales” (pág. 230). Por lo que, estos actores sociales a través de sus acciones de resistencia y estrategias de sobrevivencia se configuran como sujetos de derecho que demandan y aportan en la reconstrucción de sus vidas y comunidades.

5. La paz en jaque: entre los proyectos de desarrollo y la resistencia de las comunidades

Tras el proceso de pacificación armada que se dio en el Oriente antioqueño y en el municipio de Sonsón, se generó un ambiente de relativa tranquilidad. En ese contexto, las familias desplazadas comenzaron a regresar a sus tierras, en la mayoría de los casos, bajo su propio esfuerzo y sin contar con un acompañamiento institucional. De manera paralela a estos procesos de retorno, se reactivaron los proyectos minero-energéticos que, en ciertos casos, ya se venían gestando desde los años 80, por medio de estudios o licencias, pero que se vieron interrumpidos por la confrontación armada. Esto demuestra cómo “los vencedores de la guerra implementan su

modelo económico, el proyecto minero-energético en el Oriente antioqueño” (Restrepo, 2015, p.24).

Ante un tejido social resquebrajado por las huellas de la guerra y el exterminio de gran parte de los líderes sociales en el contexto de la confrontación armada, este modelo económico enclavado en una nueva oleada de imposición de megaproyectos tuvo el camino libre para ingresar a los territorios del municipio de Sonsón. En este sentido, los intereses de la población que estaba retornando, queriendo levantar sus fincas principalmente de producción agrícola, chocaron nuevamente con las intenciones de las empresas de desarrollar proyectos minero-energéticos en la región (Movete, 2018 pág. 65). Por lo tanto, se gesta un conflicto que opone a diversos actores económicos y políticos por el control de la región, el cual se enmarca en la lógica de un modelo de gobernanza neoliberal, “que despliega una serie de disputas entre diferentes actores que se caracterizan por tener relaciones asimétricas y diferentes concepciones del territorio de acuerdo con su forma de apropiación/dominación” (Movete, 2018 pág. 110).

5.1 Proyectos hidroeléctricos

En lo que respecta al municipio de Sonsón, ya en la década de los sesenta se convirtió en uno de los territorios destinados para la expansión de este tipo de proyectos, así para este período se construyeron las centrales hidroeléctricas Sonsón I y Sonsón II. Tras el proceso de pacificación armada en estos territorios, este municipio vuelve a ser objeto de interés para el desarrollo de estos proyectos al contar con una importante riqueza hídrica, proveniente del páramo. Así, en el año 2019 se construye la pequeña central hidroeléctrica Aures Bajo y se empiezan a proyectar un gran número de pequeñas y medianas centrales en el territorio: Hidroarma, Sigua I, Sigue II, Paloma I y II, Paloma III y IV, Aures Arriba, Guayacanes (Río Samaná Norte). La proliferación de estos proyectos en el territorio y los impactos que pueden generar para la vida de las comunidades y el medio ambiente ha desatado una serie de disputas entre empresas privadas, entidades estatales y pobladores de la zona.

De acuerdo con el trabajo de campo, estas centrales hidroeléctricas han generado conflictos socioambientales en el municipio que han propiciado nuevos desplazamientos de población, causados esta vez no por el conflicto armado, sino por las consecuencias ambientales sobre el territorio. Además, se están generando nuevas dinámicas que pueden devenir en procesos de venta forzada, ante la presión que existe por adueñarse de las tierras para realizar estos proyectos

energéticos; lo que ha conllevado a una revictimización de las comunidades. Lo cual se puede entrever en el testimonio de un líder social de la región:

“Para Aures bajo se hizo una vía sin los estudios necesarios, entonces se formaron unos barrancos que se han ido deslizando. Esos deslizamientos arrasaron con los cultivos de café y plátanos de la zona. Otros cultivos que se habían salvado se deterioraron por la cantidad de polvo. Claro, no solo se vinieron los cultivos, eso también se llevó casas y habitaciones enteras de la gente que vivía ahí, se tuvieron que ir para otra parte. Con la de Hidroarma, que está en proyecto también hay muchos problemas, porque lo que quieren hacer es obligar a que los campesinos a que vendan para que puedan construir. Pero, los avalúos de los predios son un engaño. Imagínese que les quieren pagar 200 pesos por el metro cuadrado”. (Entrevistado 13, 2019)

Por otro lado, han surgido importantes disputas con Cornare²³ en medio de la planeación y construcción de estas pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas. Las disputas que las comunidades han tenido con esta entidad se deben a la manera en la que se han llevado a cabo los procesos de licenciamiento ambiental, en donde se han privilegiado los intereses de la empresa privada sobre los principios constitucionales básicos como el derecho a la vida y al medio ambiente sano, que tienen los sonsoneños. Es en este contexto de disputas territoriales, donde el 17 de septiembre de 2020, se crea la mesa la Mesa de Diálogo Socioambiental, la cual es un espacio que busca propiciar la participación de las comunidades en la planificación de las políticas medioambientales que impactan el territorio. Como lo menciona uno de los líderes ambientales que empezó a formar parte de esta mesa, lo que las comunidades quieren es: “una construcción democrática del territorio, donde se tengan en cuentas las necesidades de los campesinos y donde no se llegue a la imposición de unos proyectos y modos de vida ajenos a sus costumbres” (Entrevistado 18, 2020).

Proyectos mineros

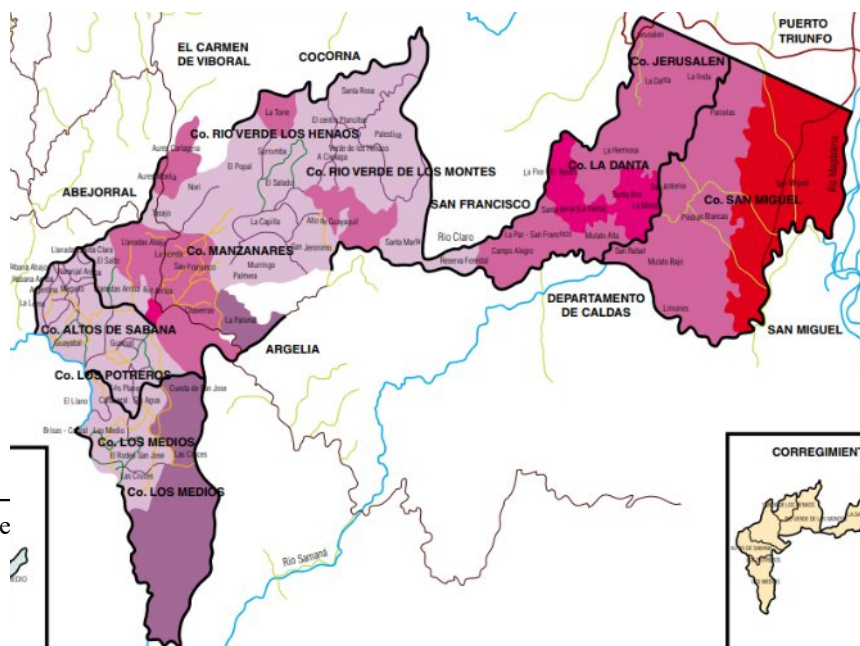
A partir del 2003 con las operaciones militares en el Oriente Antioqueño, la desmovilización de las Autodefensas a cargo de Ramón Isaza para el 2006 y la salida del bloque 9 y el 47 de las FARC- EP del Oriente Antioqueño, los hechos violentos asociados al conflicto armado tienden a

²³ La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, CORNARE, es una de las Corporaciones Autónomas Regionales que se crean mediante la Ley 60 de 1983; la cual se encarga de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

desaparecer. Sin embargo, las dinámicas respecto al despojo y el abandono en el Magdalena Medio sonsoneño, no terminaron. A partir del supuesto retiro de grupos armados de esta zona del municipio, continuaría la consolidación de proyectos extractivos concentrados en el sector minero, que han propendido por traer prosperidad a la región. Sin embargo, este modelo extractivo está enclavado en un proceso de acumulación de tierras y de despojo, que traen como consecuencia la transformación de las relaciones tierra-trabajo. Autores como el geógrafo inglés David Harvey (2006) denominan este proceso como “acumulación por desposesión” así como otros autores latinoamericanos la refieren como “acumulación por despojo”, en tanto se despliega un “proceso social de apropiación privada por parte de grandes corporaciones de bienes naturales que eran de propiedad común o privada, que servían a la reproducción social de la vida local o constituían parte del hábitat territorial”²⁴ (Algranati, Seoane y Taddei, 2013, pág. 16).

De acuerdo con, las entrevistas realizadas a habitantes de la zona y consultando a expertos, en el Magdalena Medio sonsoneño, se llevó a cabo un proceso de acumulación por desposesión para llevar a cabo la expansión de la extracción minera y de ganadería en la región. Habitantes de la zona, han denunciado que miembros de grupos paramilitares tras el proceso de desmovilización, presionaron a los poseedores, ocupantes, propietarios o tenedores de los predios para que llevarán a cabo la venta de sus lotes, ya que empresas mineras estaban necesitando terrenos en Jerusalén y La Danta para expandir el área de explotación. De acuerdo con, el Instituto Popular de Capacitación en el 2011: “la propiedad en Sonsón registrada ante la Oficina de Instrumentos Públicos revela que la mayor concentración de riqueza se encuentra en la zona del Magdalena Medio. Se concentra en San Miguel, seguido de La Danta y Los Medios, y finalmente el Alto de Sabanas” (pág.

313)



²⁴ El carácter social de

Figura 5: Concentración de predios en calidad de propiedad privada en el municipio de Sonsón

Fuente: Análisis de información catastral realizado por el Instituto Popular de Capacitación, 2011.

Así, tras la desmovilización y con la llegada de Argos a la zona del Magdalena medio sonsoneño para llevar a cabo la explotación de piedra caliza y mármol; estos actores armados se convierten en grandes aliados para llevar a cabo el despojo de predios que son de interés para la explotación minera, generando miedo y zozobra en la población dando paso a que estas situaciones de violencia queden en el olvido y no sean objeto de denuncia pública. Esta dinámica se lleva a cabo a partir de la vía jurídica, trasladando derechos de propiedad de campesinos a empresarios, y por la vía de hecho, expulsando población contratando mercenarios, en este caso paramilitares. Así, la población que es propietaria de los predios los vende de manera forzosa a los empresarios interesados en la explotación minera con escritura y matrícula; mientras que quienes están en aquellos predios en condición de ocupación de baldíos venden al precio que la empresa les exige ante las amenazas por parte de esta de ser denunciados al estar en un predio sin formalización que es propiedad estatal.

Por otro lado, en el contexto del modelo neoliberal actual y en el proceso de acumulación por desposesión, la relación entre la naturaleza y el trabajador se modifica, en tanto se rompe el vínculo entre ambos cuando “en este proceso se separa súbita y violentamente a grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de producción para constituir a los trabajadores libres” (Marx, 2004, pág. 895). Esta situación se presenta claramente en el territorio estudiado, cuando los campesinos son despojados por vía legal y/o violenta de sus predios o se ven conminados a abandonar su predio; y las garantías de vivienda, bienestar, subsistencia y dignidad que les permitía sus derechos con la tierra se ven rotas y desarticuladas. Ante esta situación, muchos de ellos se ven empujados a convertirse en trabajadores asalariados de los proyectos mineros o ganaderos que bajo el sistema de producción imperante los dejó sin derecho al territorio, al uso público del suelo y a las libertades de acceso a la propiedad privada.

Reparación en el municipio de Sonsón: ¿una reparación transformadora?

A partir del trabajo de campo realizado y de la revisión de fuentes secundarias, se encontró que, particularmente para el municipio de Sonsón el proceso de restitución de tierras ha sido bastante lento. En primer lugar, porque para que pueda llevarse a cabo la restitución es necesario que se realicen procesos de desminado que garanticen condiciones de seguridad en el territorio. En Sonsón, el proceso de desminado ha sido muy problemático, en tanto no fue uno de los municipios priorizados para estos procedimientos en el Oriente antioqueño. El Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario en Ejército Nacional de Colombia, enfocó sus labores en el desminado de: San Carlos, San Luis, Granada, una parte de San Francisco, San Rafael. Por lo que, los pobladores de Sonsón tuvieron que esperar a que Halo Trust, una organización de carácter civil realizara estas labores de desminado en sus territorios²⁵. Por otro lado, un ex funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia me comentó que: “en Sonsón existe una falta enorme de capacidad técnica y presupuestal para llevar a cabo los procesos de microfocalización en el territorio” (Entrevistado 11, 2020). La microfocalización es el proceso mediante el cual, se definen las áreas geográficas en las cuales se debe hacer el estudio de las solicitudes de restitución recibidas. Sin estas decisiones, los equipos de terreno no pueden estudiar las solicitudes. Por lo tanto, esta situación ha dificultado que campesinos del territorio, tengan la capacidad de reconstruir un proyecto de vida en la tierra que antes habitaban.

Por otro lado, se encontró que las acciones de reparación se han limitado a medidas básicas de superación de la pobreza, marcadas por una mínima redistribución bajo la intencionalidad de pacificar los descontentos locales frente a la desigualdad. Esto se evidencia en medidas de reparación como: pozos sépticos, estufas eficientes, medidas de asistencia humanitaria inmediata. Además, de la construcción de carreteras que han intentado disminuir el descontento de algunos pobladores que habitan en zonas bastante alejadas del caso urbano y que, por lo tanto, tienen grandes dificultades de conexión y acceso a otros puntos del municipio y a otros poblados centros poblados aledaños. Por otro lado, los montos de la reparación administrativa han sido poco

²⁵ “Desde 2013, HALO ha estado realizando operaciones de desminado civil humanitario que incluyen despeje de minas antipersonal en Colombia, haciendo que la tierra sea segura en Antioquia, Meta, Tolima, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo y pronto comenzará a trabajar en Norte de Santander. Hemos eliminado las minas antipersonales de los cultivos de café, fincas, veredas y resguardos indígenas, entre otros” (Halo Trust,2018). Recuperado de: <https://www.halotrust.org/where-we-work/latin-america/colombia-espanol/>

significativos para impactar económicamente la vida de estas comunidades ²⁶y en ocasiones, recibir este tipo de recursos les ha resultado hasta problemático, como lo menciona uno de los campesinos de Río Verde de los Montes:

“Vea, hija muchas veces uno prefería no pegarse ese viaje hasta Medellín, porque salir de acá de Río Verde siempre es difícil. Además, uno mismo se tiene que pagar la ida hasta allá. Y sinceramente ir hasta por allá por 50.000 o 70.000 pesos, no vale la pena” (Entrevistado 20, 2020).

Además, las medidas de reparación de la población campesina se han concentrado en impulsar la realización de proyectos productivos, sobre todo el proyecto productivo de aguacate Hass de tipo exportación²⁷. Sin embargo, estos proyectos en realidad no tienen en cuenta las particularidades del sujeto campesino a la hora de repararlo. Se deja de lado su relación con el territorio y las condiciones de desigualdad económica, política y económica que han atravesado históricamente. Así, que dichas medidas son solo paliativos para su situación de marginalidad y exclusión, que terminan por incluirlos en unas lógicas de mercado que siguen perpetuando condiciones de injusticia y pobreza. Así, lo relata un poblador de Río Verde de los Montes:

“¿Qué me gano yo con que venga un técnico hasta acá a entregarme unas semillas o unos materiales? Si cuando uno va a vender lo que saca de la tierra se vende bien barato, pero los insumos para mantener el cultivo si son bien caros. Además, eso no viene de ahora, eso ha pasado desde siempre. Por eso el campo, se está quedando tan solo, porque no hay políticas integrales para nosotros” (Entrevistado 12, 2019).

Por lo tanto, estas medidas de reparación no han transformado las condiciones de marginalidad política, social y económica que han experimentado estas comunidades, incluso antes de la situación violenta en el municipio, es decir, no han podido gozar de derechos básicos fundamentales precisamente “por la ausencia o debilidad de lo que Hannah Arendt llama espacios

²⁶ Se han entregado entre dos y tres subsidios a la población desplazada. Los primeros rondan el millón de pesos, los demás entre 150.000 y 50.000 pesos.

²⁷ “En el Municipio de Sonsón la variedad más sembrada en aguacate es el tipo Hass, porque es un producto exportable que genera rentabilidad en el tiempo, se cuenta con un estimado de 3800 hectáreas en todo el municipio, no contamos con la información puntual sobre áreas y proporciones en cada corregimiento y/o vereda. El cultivo de aguacate en el municipio de Sonsón inició en los años de 1996 y fue creciendo de forma lenta hasta alrededor del año 2014 donde llegaron las empresas a adquirir predios para la siembra de grandes extensiones de aguacate, a partir de ese año y hasta la fecha las áreas sembradas en aguacate han crecido en mayor proporción dado a que el mercado de este producto ha crecido significativamente” (Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sonsón, 2021, pág. 4).

de aparición” (Ruiz y Castaño, 2017, pág. 32). Estos espacios de aparición se refieren a estos lugares donde las comunidades pueden interpelar al Estado. Sin embargo, para estas comunidades el Estado ha sido percibido como algo ajeno o externo, que aparece cuando solicita votos o en forma de fuerza de seguridad (el ejército en las operaciones militares contra las guerrillas). Por lo tanto, esos espacios de interacción entre estas comunidades y funcionarios públicos, políticos, instituciones estatales han sido marginales, en tanto se ha dificultado que estas comunidades puedan poner sobre la mesa las particularidades sobre su territorio y sus perspectivas sobre cuáles serían los mecanismos más efectivos para sentirse reparadas.

Conclusiones

A través del trabajo realizado en el municipio de Sonsón, se concluye que es un territorio donde hay disputas por la memoria y el territorio. Respecto a la memoria, existen tensiones y luchas por los sentidos del pasado, que se reflejan en las políticas de verdad y memoria que se han llevado a cabo en el municipio, las cuales han propendido por oscurecer y hasta silenciar aquellos hechos del conflicto armado que aún no han sido esclarecidos y que podrían implicar a la fuerza pública en la violación de derechos humanos. Por su parte las víctimas han llevado a cabo repertorios de resistencia y acción colectiva que les ha permitido rebatir la versión oficial o hegemónica de los hechos acaecidos durante la guerra, de resistir, de buscar su propia forma de hacer justicia. Por otro lado, la riqueza natural del municipio de Sonsón, lo ha convertido en un territorio en disputa en el que se han generado dinámicas de despojo y abandono, que peligrosamente pueden repetirse en el territorio. Además, de que el modelo económico que quiere imponerse en el municipio puede generar nuevos desequilibrios, niveles de destrucción social y medioambiental; que ponen en jaque las pretensiones de construcción de paz en este territorio.

Por otro lado, se requiere ampliar el marco de comprensión de las medidas de reparación, en tanto, es esencial reconocer la discusión sobre el territorio desde diferentes sectores para reconocer problemáticas y situaciones de carácter más estructural que han cimentado las bases de la conflictividad social y política. Por lo que, como plantean Ruiz y Castaño (2017):

Se hace necesario que el entramado institucional de atención a la población víctima se concentre no sólo en atender la inmediatez de la crisis humanitaria, sino en promover que esos espacios de aparición sean tan fuertes que incluso las víctimas puedan dejar atrás su estatus de tal sin temer volver a ser ciudadanos excluidos y marginales (pág. 44).

Por tanto, que los campesinos puedan interpelar a las diferentes instituciones estatales y que estos sean reconocidos como sujetos de derecho, les daría la posibilidad de participar en la planeación y configuración de los territorios que habitan, y evitar que instancias institucionales y privadas decidan sobre sus modos de vida y apropiación de la tierra.

Bibliografía

- Alfonso Insuasty, J. V. (2017). *Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia : historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno*. Medellín: Kavilando.
- Antiqueño, O. d. (2008). *Serie: Crónicas Corregimientos del Oriente Antioqueño*. Rionegro.
- Aparicio, J. R. (2005). Intervenciones etnográficas a propósito del sujeto desplazado: estrategias para (des)mobilizar una política de la representación. *Revista Colombiana de Antropología*, 135-169.
- Aparicio, J. R. (2017). Hacer un desplazado: dimensiones institucionales y subjetivas del programa de atención a víctimas del conflicto armado en Colombia. *Revista de Antropología Social*.
- Arendt, H. (2005). *La Condición Humana*. Barcelona: Paidós.
- Arias, W. (2018). *Así se roban la tierra en Colombia*.
- Butler, J. (2017). *Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea*. Barcelona : Espasa.
- Blair, E. (2011). Micro políticas de la(s) memoria(s): el sentido político de la dignidad. *Desde la Región*.
- Bloomfield, D. (2015). *Reconciliación : perspectivas y aportes conceptuales para su comprensión*. Bogotá: Cinep.
- Boltanski, L. (1990). *El amor y la justicia como competencias: Tres ensayos de sociología de la*. Paris: AMORRORTU.
- Bourdieu, P. (1996). *Economía de los intercambios lingüísticos*. Sao Pablo : Edusp.
- Cárdenas, J. (2015). ley de restitución de tierras en Colombia de espaldas a los opositores de buena fe. *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos* 26 139 Volumen 26 (2), II Semestre 2015 (EISSN: 2215-4221).
- Castro, J. C. (2019). *Fin de semana negro*. Medellín: Silaba.
- Catela, L. d. (2000). De eso no se habla. Cuestiones metodológicas sobre los límites y el silencio en entrevistas a familiares de desaparecidos políticos. *Historia, Antropología y Fuentes Orales*, 69-75.

- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). *¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Chetty, S. (1996). The case study method for research in small- and médium - sized. *International small business journal*.
- Clacso, I. (2011). *Realidades del despojo de tierras: retos para la paz en Colombia*. Medellín. Medellín.
- Clara Algranati, E. T. (2013). *Extractivismo, despojo y crisis climática*. El Colectivo.
- Clara Inés García, C. I. (2014). Ordenes locales y conflicto armado, una metodología comparada. *Análisis Político*.
- Conciudadanía. (2019). *Sonsón Memoria Viva* . Medellín: Conciudadanía.
- Cortés, P. (2011). El Sentido de las historias de vida en investigaciones socioeducativas. Una revisión crítica en Hernández, Sancho y Rivas. En S. y. Hernández, *Historias de Vida en Educación. Biografías en Contexto* (págs. 68-74). Barcelona: ESBRINA - RECERCA.
- Delgado, R. C. (2009). Origen, liderazgo e ideología de los partidos políticos mexiquenses. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*.
- Dijk, T. A. (2005). Política, ideología y discurso . *Quorum académico*, 15-47.
- Duncan, G. (2015). *Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Bogotá: Penguin Random House.
- Escobar, A. (2007). *La invención del tercer mundo*. Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana.
- Francisco Jiménez, Á. G. (2012). La negación del conflicto colombiano: un obstáculo para la paz. *Espacios públicos*, 9-34.
- Galtung, J. (2003). *Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización*. Bilbao: Gernika Gogoratus.
- García, C. I. (2007). Conflicto, discursos y reconfiguración regional.El oriente antioqueño: de la Violencia de los cincuenta al Laboratorio de Paz. *Revista*.
- García, C. I., & Aramburo, C. I. (2011). *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia : Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008*. Iner- Codefi.
- Ghiso, A. (2002). Técnicas Interactivas para la Investigación Social Cualitativa. *Fundación Universitaria Luis Amigó*.
- Gómez, A. (2008). *Corregimientos del Oriente Antioqueño*. Rionegro: Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño .
- Granada, J. A. (2018). *La Unión: un territorio en disputa, memorias del conflicto armado*. Medellín : Universidad de Antioquia .

- Hincapié, M. T. (2001). Nación, ciudadano y soberano. *Serie Pensamientos*, Corporación Región .
- Hincapié, M. T. (2006). Notas preliminares sobre resistencias de la sociedad civil en un contexto de guerras y transacciones. *Estudios Políticos*.
- Histórica, C. N. (2013). *Medellín: Memorias de una guerra urbana*. Medellín.
- Histórica, C. N. (2013). *Recordar y narrar el conflicto: herramientas para reconstruir memoria histórica*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
- Ingrid Bolívar, F. G. (2003). *Violencia Política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*. Bogotá: Cinep.
- Isabel, G. (2015). Un derecho elaborado puntada a puntada. La experiencia del Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón. *Universidad de Antioquia*.
- Jaramillo, C. C. (2016). *Desarrollo local, conflicto armado y modelo de desarrollo : el caso de Sonsón*. Medellín : Universidad de Antioquia.
- Jelin, E. (2001). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI España editores S.A.
- Jiménez, W. O. (2010). Los paraestados en Colombia. A propósito de una investigación culminada. *Revista Facultad de Derecho. Ratio Juris*, 77-97.
- José Seoane, E. T. (2013). *Extractivismo, despojo y crisis climática*.
- Libertad, C. J. (2018). *Proyecto: Fortalecimiento de la comunicación e incidencia política de MOVETE para la defensa del territorio en el Oriente Antioqueño*. Medellín .
- Madrigal, F. (2018). *Análisis de Contexto Corregimiento de la Danta, municipio de Sonsón*. Medellín.
- Marín, G. M. (2008). *Mis anécdotas*. Sonsón: Universidad de Antioquia.
- Marx, C. (2004). *El capital. Tomo I, Vol. 3, Capítulos XXIV y XXV* . Buenos Aires.
- Mesa, J. A. (2015). La ley de restitución de tierras en Colombia de espaldas a los opositores de buena fe. *Revista Latinamericana de Derechos Humanos* .
- Mika, H. (2009). Sobre el concepto de justicia transicional desde abajo. Entrevista con el profesor Harry Mika. *Centro Internacional para la Justicia Transicional y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad* , 227-245.
- Movete. (2018). *Memorias y Resistencias*. Periferia.
- Olaya, C. (2012). *Nunca más contra nadie: Ciclos de violencia en la historia de San Carlos*. Cuervo Editores.
- Olaya, C. (2016). El exterminio del Movimiento Cívico del Oriente de Antioquia. *Ágora U.S.B*, 128-144.

- Onofre, A. A. (2016). Dinámicas capitalistas para la acumulación por despojo. *Rev. Ciencias Sociales 151*, 31- 41.
- Packer, M. (2013). *La ciencia de la investigación cualitativa*. Bogotá : Uniandes.
- Pecaut, D. (1988). La pérdida de los derechos, del significado de la experiencia y de la inserción social: a propósito de los desplazados en Colombia. *Estudios Políticos 14*, 13-28.
- Peña, L. (2019). *Paz territorial: conectando imaginación moral con e imaginación geográfica*. Bogotá: Insituto Colombo- Alemán para la paz.
- Portelli, A. (1991). *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories*. New York: State University of New York Press.
- propuesta, D. I. (1987). *Ramón Emilio Arcila* . Bogotá: Tribuna.
- Reconciliación, C. N. (2009). *Víctimas, violencia y despojo. Informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado*.
- Restrepo, F. E. (2015). *El proyecto minero-energético en la región del Oriente Antioqueño y sus impactos sobre el territorio*. Medellín: Corporación Jurídica Libertad .
- Rincón, A. M. (2018). Dimensión constitucional y mecanismos de la acción de restitución de tierras en Colombia. *Rev. Derecho no.49 Barranquilla Jan./June* .
- Rodriguez, A. I. (2017). Queremos construir nuestros territorios. *Ágora U.S.B.*
- Romero, G. R., & Zapata, D. C. (2018). Hacer un desplazado: dimensiones institucionales y subjetivas del programa de atención a víctimas del conflicto armado en Colombia. *Revista de Antropología Social* , 23-48.
- Ruiz, C. (1984). Un pueblo en lucha: El Oriente.
- Saénz, O. (1986). *Desarrollo regional y movimientos cívicos en el Oriente Antioqueño. 1860 – 1982*. Bogotá: Cinep.
- Sánchez, G. I. (2013). Justicia transicional “desde abajo”: Un marco teórico constructivista crítico para el análisis de la experiencia colombiana. *Co-Herencia*, 137-166.
- Sanz, R. G. (2000). *Micropolíticas del cuerpo*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Shakespeare, W. (1600).
- Torres, E. A. (2009). *Luchas cívicas, trayectorias geopolíticas en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
- Uprimny, R., & Saffon, M. P. (2009). Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática. En J. y. Corte Internacional Para la Justicia Transicional y Centro de Estudios de Derecho, *Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión*.

Vera, F. H. (2016). La construcción del concepto de paz: paz negativa, paz positiva y paz imperfecta. *Cuadernos de estrategia*.

Yin, R. (1989). *Case Study Research: Design and Methods*,. SAGE Publications.